

CAMARA FEDERAL DE COMODORO RIVADAVIA

FCR 9857/2025/8

//modoro Rivadavia, 19 de noviembre de 2025.

Y VISTOS:

Estos actuados identificados con Nro. De Carpeta Judicial FCR 9857/2025/8, " [REDACTED] s/ audiencia de sustanciación de la impugnación (art. 362 CPPF)", Legajo de investigación - Caso Coirón nro. 137821/2025, procedentes del Juzgado Federal de Garantías de Río Grande.

Y CONSIDERANDO:

I.- Que estas actuaciones fueron puestas a consideración del suscripto en virtud de la impugnación promovida por la Dra. Noelia Melina Galera -Defensora Pública Oficial en representación de [REDACTED] y [REDACTED] contra la decisión adoptada por la Dra. Mariel E. Borruto - Juez de Garantías de Río Grande – en fecha 24/10/25, oportunidad en la que autorizó la inhibición general de bienes de los nombrados y la inmovilización y bloqueo de la totalidad de las cuentas bancarias y proveedores de servicios de pago/Fintech con prohibición de movimiento y retención de fondos y valores(punto II); y autorizó al MPF que solicite al REPROCANN a que se revoquen o dejen sin efecto toda inscripción y permiso otorgado a su nombre (punto V).

Si bien el veredicto que resolvió las impugnaciones formuladas ya ha sido adelantado por el suscripto en el mismo acto de la audiencia celebrada, fue diferida la exposición de sus fundamentos, con el propósito de dotarlos de mayor claridad expositiva, argumentos según los cuales, me encuentro convencido de que la decisión de grado debe ser revocada.

II.- RECAUDOS FORMALES (arts. 356, 223 y 352 inc. b del CPPF).

En primer término, encuentro procedente la interposición del recurso deducido por la Defensa de [REDACTED] y [REDACTED] en tanto se dirige contra una resolución objetivamente susceptible de impugnación, en los términos del artículo 356 del Código Procesal Penal Federal (CPPF) – norma que incluye como impugnables a aquellas resoluciones que hacen a la "aplicación de medidas cautelares"; habiéndose verificado asimismo el cumplimiento de los requisitos de temporaneidad y fundamentación exigidos por el artículo 360 del mismo ordenamiento procesal.



Que por otra parte, y en cuanto a la procedencia subjetiva del recurso, el art. 352 inc. b CPPF otorga legitimidad al imputado para impugnar “las medidas de coerción y demás cautelares...”, razón por la que, más allá de la discusión centrada en si la decisión impugnada involucra medidas de prueba o cautelares -de carácter patrimonial o personal- distinción de la que me ocuparé más adelante, entiendo que el recurso debe ser formalmente admitido, pues es la solución que se compadece con el respeto a la garantía de doble conforme, de rango constitucional y convencional.

III.- LA DECISION DE LA A QUO

Superado este examen formal preliminar, corresponde ingresar al tratamiento de la cuestión de fondo traída a conocimiento de este magistrado, referida a la revisión de la decisión adoptada por la Sra. Juez de garantías de Río Grande en la resolución de fecha 24 de octubre de 2025 en la cual -en la parte pertinente venida aquí en revisión- dispuso:

“II. AUTORIZAR la INHIBICION GENERAL DE BIENES de [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED] (DNI 94454570), [REDACTED]
[REDACTED] y [REDACTED]
[REDACTED] y la INMOVILIZACIÓN Y BLOQUEO de la totalidad de sus cuentas bancarias y de proveedores de servicios de pago/fintech, con prohibición de movimientos y retención de fondos y valores hasta nueva orden y se autorizará al Ministerio Público Fiscal a realizar las comunicaciones correspondientes. En ese orden, si bien no es potestad del órgano jurisdiccional proponer medidas investigativas o coercitivas, sí es admisible sugerir a esa acusación pública que, para que la medida solicitada tenga el efecto pretendido, resultaría de utilidad que se librasen oficios, además, al Registro de la Propiedad Automotor e Inmobiliario que corresponda, a los fines de informar la decisión adoptada por el tribunal en esta oportunidad.... V. AUTORIZAR al Ministerio Público Fiscal a que solicite al REPROCANN a que se revoquen o se dejen sin efecto – mientras dure la investigación – toda inscripción y permiso otorgado a nombre de [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED] y [REDACTED] Se autoriza a que las medidas aquí ordenadas se libren bajo el amparo del art. 264 del CPPF”.

La Defensa Pública oficial en representación de los imputados [REDACTED] y [REDACTED] impugnó dicha resolución calificándolas como verdaderas medidas cautelares de suma gravedad en



CAMARA FEDERAL DE COMODORO RIVADAVIA

tanto importan el congelamiento e inmovilización de fondos y la revocación y/o suspensión de las inscripciones y permisos en el REPROCANN de sus asistidos.

Argumentó a tal fin, que se ha violado el principio de contradicción y del derecho de defensa que consagran expresamente los arts. 2, 6, 111, 129 y 132 del CPPF, al haberse adoptado esa decisión sin cumplir los requisitos esenciales del debido proceso legal (art 18 C.N. y 8.2 CADH).

Añadió que se ha efectuado una errónea aplicación del art 264 del CPPF, en tanto no se trata de medidas de prueba sino de medidas cautelares restrictivas de derechos patrimoniales y personales; que se ha omitido efectuar un control judicial efectivo acorde al debido proceso; advirtió sobre la ausencia de sustento fáctico que justifique las medidas adoptadas, argumentando respecto de la prohibición de ordenar una medida que implique un adelantamiento de pena, tal y como lo sería la suspensión de la autorización en el REPROCANN. Puntualmente respecto de [REDACTED], señaló que no se le atribuyó conducta concreta alguna, ni fundamentos individualizados que justificaran la adopción de tales medidas a su respecto.

IV.- En este punto y de manera preliminar, estimo necesario precisar el objeto que deberá ser tratado en esta instancia de revisión, en tanto por auto de fecha 06/11/25 la magistrada de garantías -luego de destacar que los planteos nulificantes deducidos por la defensa recurrente no encuadraban dentro de las decisiones impugnables previstas en el art 356 del CPPF, rechazó la vía recursiva intentada a su respecto. Es dable mencionar que los argumentos que sustentaron tal planteo nulificante, coinciden con los reeditados ante esta instancia en cuanto al tratamiento unilateral y sin previa audiencia de la cuestión, esto es, sin que fuera garantizado el contradictorio frente a la pretensión fiscal.

De esta manera, ha quedado habilitada esta instancia para revisar las medidas autorizadas en fecha 24 de octubre de 2025 -las que anteriormente he transcripto- las que habrían sido informadas a las partes por el MPF en fecha 31 de octubre del corriente año, sin que con antelación a esta audiencia, la Defensa hubiera instado una queja que permitiera revisar la apuntada denegatoria, con lo cual, ha quedado establecido y debo circunscribirme al control de legalidad respecto de las dos medidas vinculadas a la inmovilización de fondos y cuentas bancarias y a la suspensión de las autorizaciones e inscripciones en el REPROCANN.



V.- Para comenzar este examen señalaré inicialmente ciertos parámetros interpretativos que me servirán para contextualizar la cuestión objeto de recurso y para sustentar mis conclusiones.

Así, y siguiendo la misma línea de pensamiento que plasmé al decidir en el marco de la carpeta judicial FCR 8990/2025/6 "Galarce", advierto que debo efectuar un control de legalidad sobre las medidas ordenadas por la jueza de garantías, sin que hasta la fecha el Ministerio Público Fiscal hubiera formalizado su investigación preparatoria - art 254 del CPPF - aspecto que destaco, porque se vincula directamente con el contexto fáctico que debe ser examinado para determinar la viabilidad de las medidas adoptadas, en tanto si bien no se encuentra vencido el plazo que a tal fin otorga el art 253 del código adjetivo, me lleva a desconocer con precisión, el hecho que la Fiscalía pretende enrostrar, su calificación penal, la participación de los investigados en el hecho y las pruebas con que cuenta en su contra.

La importancia de tal acto procesal- razón por la que entiendo necesario detenerme en este punto- emerge al comprender que la formalización de la investigación preparatoria es un acto complejo ya que comprende dos situaciones procesales: por un lado es el acto en el que exterioriza el Ministerio Público Fiscal su voluntad de ejercer la acción penal contra una persona determinada; y por el otro porque en el acto de la audiencia solicitada y convocada a tal fin, el Fiscal comunica de forma efectiva al destinatario (imputado) y a su defensa técnica, el contenido de la imputación, posibilitándole que pueda ejercer plenamente su derecho de defensa en juicio y elabore su estrategia procesal.

Durante el desarrollo de la audiencia referida, el magistrado con funciones de garantías debe controlar la legalidad de la imputación, en particular que el hecho que se comunique se encuentre descripto en forma clara, precisa y circunstanciada, además de la restante información ya enunciada (art 254 primer párrafo), derivando de ello la trascendencia que dicho acto procesal reviste, el cual si bien es cierto que es posible realizar sin exceder los noventa días (eventualmente prorrogables con autorización judicial, conforme art. 253 tercer párrafo), también lo es que "Una vez iniciada la etapa preparatoria (art 235) y en el lapso de quince días fijado en el art 248 o después de concluida la investigación previa a la formalización o el tiempo para concretarla (art 253), o en setenta y dos horas si se detuvo a la persona por orden del juez o por las fuerzas de seguridad en flagrancia y sea su interés la aplicación de la prisión preventiva (siempre art. 253), si el representante del Ministerio Público Fiscal cuenta con la información necesaria



CAMARA FEDERAL DE COMODORO RIVADAVIA

para sostener la existencia de elementos suficientes (art. 255) que den cuenta de la comisión de un delito...podrá proceder a formalizar la investigación y, a tales fines, requerir del juez una audiencia (art 257), que se sustanciará en su presencia” (Código Procesal Penal Federal Comentado- Roberto Daray - Ed Hammurabi-Tomo 2, pág 555); el subrayado me pertenece).

Esta atribución ejercida por el MPF, como verdadera “potestad”, no altera el debido proceso, en tanto de las previsiones de los arts. 233 y 256 emerge la posibilidad constante de la defensa de tener acceso irrestricto al legajo fiscal, interpretación que de manera pacífica sostiene la doctrina, y porque una solución adversa contrariaría lo preceptuado por la CIDH acerca de que “la defensa (del imputado) debe poder ejercerse desde que se señala una persona como posible autor o partícipe de un hecho punible y solo culmina cuando finaliza el proceso, incluyendo en su caso la etapa de ejecución de la pena. Impedir que la persona ejerza su derecho de defensa desde que se inicia la investigación en su contra y la autoridad dispone o ejercita actos que implican afectación de derechos, es potenciar los poderes investigativos del Estado en desmedro de derechos fundamentales de la persona investigada” (CIDH 26/11/10 “Cabrera García y Montiel Flores v. México, #154).

Trasladando dichos principios fundamentales al caso que nos ocupa, encuentro que la dilación que voluntariamente asumió el MPF para concretar el acto de formalización de la investigación, extendiéndolo hasta el límite de los plazos procesales establecidos para hacerlo, si bien lo habilita a solicitar -unilateralmente- aquellas medidas o diligencias que a su criterio son necesarias y conducentes para avanzar en la investigación del caso, también hace que se deba ser más riguroso cuando se trata de controlar medidas como las que me convocan, verdaderas cautelares y no diligencias de prueba, en tanto avanzan y constituyen restricciones sobre los derechos personales o patrimoniales de los imputados.

En efecto, y aun sin entrar en el fondo de los planteos nulificantes que - tal y como adelantara al inicio -han quedado fuera de esta instancia de revisión, considero que debe entenderse y diferenciarse que las diligencias probatorias, cuya comunicación al imputado conduciría directamente a la frustración de su propósito, son las únicas que pueden permanecer reservadas, impidiéndose su acceso para que asegurar su efectividad. Ello conduce a admitir que el fiscal se encuentra legítimamente autorizado durante esta etapa (previa a la formalización), para desarrollar toda actividad de comprobación que estime necesaria, ya sea de manera directa o con intervención judicial según lo prevé el



código en cada caso y cuyos resultados deberá informar al encausado y a su defensa técnica. Conclusión que, reitero, aplica cuando de diligencias probatorias se trata (con o sin previa autorización del juez), pudiendo mantener la reserva por razones fundadas con posterior control judicial acorde a lo establecido en el art 155 CPPF.

En este contexto y según los propios dichos de la defensa, encuentro que la Fiscalía ha cumplido con el deber de información que deriva del art 65 inc. k del CPPF en cuanto le asiste al imputado el derecho "A acceder a toda la información disponible desde el momento en que tenga noticia de la existencia del proceso, según las previsiones de este Código".

Este deber de información incluye no sólo las diligencias probatorias a las que me he referido anteriormente, sino de manera especial cuando se trata de examinar medidas cautelares, las cuales no escapan de las reglas y principios generales que hacen a su procedencia, dado que deben ser diferenciadas de las primeras, pues se trata de instrumentos procesales coercitivos, de carácter provisional y preventivo, que se imponen sobre las personas o bienes para proteger a la víctima, asegurar el cumplimiento de una eventual sentencia y/o garantizar el desarrollo del proceso.

Siendo éste su propósito, y empleando la terminología del código, que ha distinguido entre medidas de coerción y medidas cautelares (arts. 209 y 219), -pero asignándoles a ambas carácter restrictivo - entiendo que el trámite que debe seguirse para su dictado no escapa de la previsión general contenida en el art 223 6to párrafo en cuanto a que "El requerimiento de una medida cautelar será formulado por las partes ante el juez. Deberá especificar el alcance, plazo de duración y fundamentos de la medida. El juez podrá convocar a audiencia unilateral previo a tomar la decisión".

Vale recordar, que las medidas cautelares de índole patrimonial -por regla general- se decretan inaudita parte (art 223 6to.párrafo en consonancia con el art. 198 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). La propia naturaleza de este tipo de providencia conlleva a que se disponga sin la participación del afectado, pues de lo contrario podría frustrarse la finalidad de la medida precautoria.

En cuanto a posibles planteos de la afectación del principio de contradicción derivado de la cláusula constitucional que consagra la inviolabilidad de la defensa en juicio (art. 18 de la Constitución Nacional), comparto lo sostenido por la doctrina civilista que ha concluido que ese principio no se conculca pues lo que



CAMARA FEDERAL DE COMODORO RIVADAVIA

conlleva el procedimiento cautelar dispuesto es "un aplazamiento o postergación de la facultad de ser oído o de controvertir con amplitud" porque las medidas cautelares pueden ser cuestionadas una vez que se trabaron, acorde a la posibilidad ya señalada que otorga el art 155 del CPPF.

VI.- Verificada entonces que la forma unilateral en la que han sido dispuestas las apuntadas medidas cautelares - pues en esta categoría corresponde su encuadre y tratamiento -no contraría ninguna disposición legal, ni se vulnera el debido proceso, debo avocarme a examinar su pertinencia, análisis que comenzaré con la inmovilización de los fondos y seguidamente la suspensión de los permisos del REPROCANN, ambos a la luz de la limitación derivada de la etapa procesal que se transita y a la que me he dedicado al inicio.

Respecto de las primeras, recordaré que la CIDH ha admitido su dictado en el marco de un proceso penal "siempre y cuando exista una debida justificación para adoptar estas medidas, pues la correspondiente afectación que se genera al poder de disposición sobre los bienes no constituye en sí misma una vulneración al derecho de propiedad...teniendo en cuenta que no significan un traslado de la titularidad del derecho de dominio" ("Chaparro Alvarez y Lapo Iñiguez v. Ecuador", #189).

Para su solicitud, dispone el art 223 séptimo párrafo que "La resolución que imponga una medida de coerción o cautelar deberá individualizar al imputado, enunciar los hechos que se le tribuyen, su calificación legal, expresar las circunstancias que dan fundamento a la medida y fijar el plazo por el cual se establece" lo que ha llevado a sostener respecto de las medidas descriptas en el art 219 CPPF que "Esos requisitos y exigencias muestran que pueden disponerse, recién a partir de la formalización de la investigación preparatoria (art 258) audiencia en la que se verifica su cumplimiento" (ob citada Tomo 2, pág 396).

Pese a ello, excepcionalmente y cuando exista mérito para ello, debe hacerse jugar el art 23 del CP párrafos 9º y 10º en cuanto "El juez podrá adoptar desde el inicio de las actuaciones judiciales las medidas cautelares suficientes para asegurar el decomiso del o de los inmuebles, fondos de comercio, depósitos, transportes, elementos informáticos, técnicos y de comunicación, y todo otro bien o derecho patrimonial sobre los que, por tratarse de instrumentos o efectos relacionados con el o los delitos que se investigan, el decomiso presumiblemente pueda recaer. El mismo alcance podrán tener las medidas cautelares destinadas a hacer cesar la comisión del delito o sus efectos, o a evitar que se consolide su provecho o a obstaculizar la impunidad de sus partícipes. En



todos los casos se deberá dejar a salvo los derechos de restitución o indemnización del damnificado y de terceros.” Similar redacción reconoce el art 310 del Código Procesal Penal Federal en sus párrafos 11° y 12°.

Con este alcance restrictivo debo valorar -reitero, sin haber sido formalmente expuesto el hecho imputado- que el Fiscal invocó en sustento de estas medidas cautelares, que se encuentra investigando “la siembra y cultivo de plantas destinadas a la producción de estupefacientes con fines de comercialización atribuido aquienes habrían utilizado como ardid y cobertura las autorizaciones estatales del programa REPROCANN”.

Luego de describir los elementos de interés para la investigación: arma de fuego, informe del REPAR; pericia balística; transcripción de mensajes de texto y llamadas telefónicas; sostuvo como hipótesis delictiva la existencia de una organización conformada por los investigados dedicada al comercio de estupefacientes y coacción a través del uso de armas de fuego.

A partir de los informes solicitados a ARCA describió que los investigados no poseen ingresos lícitos declarados; que carecen de empleo formal, pero sí registran flujos relevantes de dinero por billeteras/Fintech consistentes en la colocación minorista “verificada en la pericia telefónica y con la estructura operada por [REDACTED] (uso de REPROCANN como cobertura)”, registrando -según los dichos de la Fiscalía- transferencias efectuadas a través de Mercado Pago que “robustecen la trazabilidad económica hacia [REDACTED] y terceros vinculados”.

Luego, detalló la actividad laboral genérica declarada, tanto por [REDACTED] como [REDACTED], siendo ésta la de “Servicios Personales N.C.P.” pese a lo cual identificó gran cantidad de operaciones con significativo volumen económico: en el caso de [REDACTED] de ingresos y [REDACTED] de egresos y en el caso de [REDACTED] con [REDACTED] de acreditaciones, describiendo además una mecánica con varias operaciones sospechosas, bajo modalidad de fraccionamiento reiterado, transferencias exprés en un mismo día, horarios atípicos, montos estratégicos cercanos al umbral de control, etc.

Esta información resulta a mi criterio suficiente para compartir el temperamento que sostuvo la magistrada de garantías y mantener una medida precautoria que asegure la traba de los fondos existentes en las cuentas de los investigados, en la comprensión de que resulta razonable, proporcional y necesaria a los fines del cumplimiento de una eventual sentencia y/o garantizar el



CAMARA FEDERAL DE COMODORO RIVADAVIA

desarrollo del proceso, más allá de que si desaparecen los motivos que justifican su dictado, la jueza deberá evaluar la pertinencia de continuar con esta restricción.

Debo tener especialmente en consideración que el art. 16 como principio general dispone que "Las facultades que este Código reconoce para restringir o limitar el goce de derechos reconocidos por la Constitución Nacional o por los instrumentos internacionales de Derechos Humanos deben ejercerse de conformidad con los principios de idoneidad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad", parámetros que aplico a este caso, para concluir en la pertinencia de la medida.

En este sentido, adhiero a la posición sentada por la jurisprudencia de nuestros tribunales en cuanto a que "...en función de lo especificado en el artículo 23 del código penal, este tribunal ya ha dicho –con integración parcialmente distinta– que "... previo al dictado de una sentencia condenatoria, pueden ser admitidas medidas cautelares como las previstas en el ordenamiento procesal civil y comercial. Sin embargo, su viabilidad, al igual que cualquier otra de naturaleza económica que se adopte en el marco de un proceso penal, exige la concurrencia de los tres requisitos que prevén los artículos 195 a 208 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación: verosimilitud del derecho, peligro en la demora y prestación de contracautela" (causa N° 86.519/19/2 "Paredes Agüero", rta. 14-9-2020). CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL - SALA IV C.

A la luz de dichas directivas y retomando las razones justificantes que deben verificarse a los fines de contralor, corresponde señalar que ellas derivan de los indicios que proporcionan las transcripciones de los mensajes telefónicos que transcribió la Unidad Fiscal y a los que me remito para evitar repeticiones innecesarias, pero que -verosímilmente- comprometen a los hermanos [REDACTED] y a [REDACTED], los que hasta aquí, evidenciarían una actividad de cultivo, comercio y distribución minorista de estupefacientes, producto de la cual provendrían los saldos y movimientos bancarios informados, pues los imputados carecen de otra actividad económica formal u otros ingresos declarados, sin poder justificar los saldos, los movimientos y operaciones bancarias.

Ello me convence de manera provisoria, de que existe suficiente verosimilitud en la hipótesis fiscal y que resulta procedente e idónea a los fines del proceso, la traba de los fondos que ha sido solicitada, aun cuando la cautela deba ser ajustada al contexto descripto y a su finalidad o propósito.



En este orden debo decir, que no escapa a mi conocimiento que una inhibición general de bienes resulta ser una medida residual, adecuada frente a la inexistencia de bienes concretos e individualizados, siendo en este último caso procedente el embargo y no la inhibición.

En efecto, conocidas e identificadas las cuentas del imputado que la Fiscalía pretende trabar, y sin que puedan ser consideradas "insuficientes" a los fines pretendidos y acorde al estado procesal de esta investigación, entiendo que la medida cautelar deberá ser modificada, ordenándose el embargo general de fondos y valores de titularidad de [REDACTED], comprendiendo la de los proveedores de servicios de pago/Fintech, con expresa prohibición de extracciones y transferencias.

VII.- Distinta es la situación que advierto respecto de [REDACTED] [REDACTED], sobre quien ninguna maniobra ilícita concreta ha sido descripta, más allá de su presencia en el inmueble al momento del allanamiento, lo que de por sí no justifica extender similar medida sobre las cuentas bancarias de su titularidad, enumeradas en el Anexo presentado por la Fiscalía.

De manera particular reparo que, el concepto o descripción de alguna de las cuentas bancarias que figuran en dicho anexo me permitirían apartarme de la conclusión anterior sustentada en disímiles extremos fácticos, en cuanto a que registra "Cuentas a la vista para uso judicial"; "Cuenta sueldo y de la seguridad social"; "Cuentas corrientes especiales para personas jurídicas", características que, a tenor de la interpretación restrictiva que ya he justificado, me convencen de la ausencia de recaudos e indicios suficientes como para mantener la medida impugnada en su contra.

VIII.- Como segundo punto sometido a mi consideración, me dedicaré a revisar la autorización para revocar o dejar sin efecto – mientras dure la investigación -de toda inscripción y permiso otorgado por el REPROCANN a nombre de los imputados aquí recurrentes.

Examinando la plataforma fáctica que habría dado sustento a tal medida, encuentro que se integra con el intercambio de mensajes mantenidos con el Dr. [REDACTED]; el resultado del allanamiento de su domicilio particular y posible consultorio, a partir de los cuales se elaboró la hipótesis de que el mencionado galeno cobraría para otorgar los certificados médicos, a los fines de



CAMARA FEDERAL DE COMODORO RIVADAVIA

tramitar la inscripción en el REPROCANN mediante su carga digital, sin examen físico y falseando la patología que permitiría el otorgamiento de la autorización para cultivar.

Dichas autorizaciones, según la hipótesis fiscal serían utilizadas por los imputados como ardid o engaño para encubrir el comercio al menudeo de la sustancia ilícita.

Más allá de la valoración de los indicios colectados, y respecto de los permisos que fueron exhibidos por la defensa de los hermanos [REDACTED] y de [REDACTED] – únicos suscriptos por el Dr. [REDACTED] el MPF propició la incompetencia en favor del Juzgado Federal de Quilmes para investigar el cultivo -y destino- de las plantas de cannabis halladas en el marco de los allanamientos llevados a cabo en extraña jurisdicción, lo que así fue declarado por la juzgadora de garantías.

Más allá de lo señalado, encuentro que la sospecha que inicialmente sostiene la Fiscalía Federal -consistente en que todos los permisos médicos expedidos por el Dr. [REDACTED] serían espurios- carece de suficiente sustento, si nos atenemos a cuál es la finalidad que legalmente le ha sido reconocida al apuntado Registro de Programa de Cannabis enmarcada en el "tratamiento medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor a través del cultivo controlado", "...garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud" (arts 3 de la Res. M.S. Nro. 800/21 y art 1 ley 27350).

Expuesto de esta forma el propósito de dichas normas, queda claro que se vincula con el ejercicio de un derecho de carácter personalísimo, como lo es el derecho a la salud, supervisado por un organismo estatal nacional, para cuya restricción no es suficiente una sospecha inicial en una etapa preliminar del proceso, durante la cual ninguna fuerza de convicción sobre meros indicios puede ser invocada para justificar tal grave afectación de un derecho de máxima jerarquía.

Ello es así, en tanto no solamente encuentro que el certificado del imputado Arrizaga Guerrero no fue suscripto por el Dr. [REDACTED] (sino por otra profesional de la medicina, la Dra. [REDACTED]) lo que indicaría en principio, que quedaría excluido de la hipótesis criminal elaborada por la Fiscalía, sino también porque nada se ha invocado y menos acreditado respecto a que para tramitar y expedir el certificado de [REDACTED] se hubiera incurrido en similar maniobra fraudulenta.



La extensión de la sospecha del fiscal a todos los involucrados en la maniobra, sin un concreto detalle de qué hechos se les adjudica individualmente y de las pruebas existentes en contra de cada uno de ellos, me impide avalar la decisión impugnada, que privaría de efectos a la inscripción en el REPROCANN, medida que, a contrario de la anteriormente tratada, no la encuentro necesaria para facilitar la exploración de la supuesta falsedad ideológica que se acusa; el avance de la investigación por cultivo y comercio de cannabis sativa, ni tampoco apta para evitar la consumación del ilícito o el aprovechamiento de sus frutos.

Debo particularmente reparar que según la hipótesis fiscal el Dr. [REDACTED] "habría expedido certificados irregulares, lo que habría permitido montar una pantalla de supuestos pacientes y cultivadores solidarios", con lo cual, dicha maniobra pareciera desconocer la modificación introducida por la Resolución 1780/25 del Ministerio de Salud a la reglamentación original plasmada en la Resolución 1537/17; 800/21 y 3132/24.

En efecto, el Ministerio de Salud para actualizar las condiciones para la inscripción en el Registro del Programa Cannabis (REPROCANN) y con el objetivo de mejorar la trazabilidad y la seguridad del circuito de producción y acceso a productos derivados, como también asegurar el correcto uso terapéutico y/o medicinal previsto en la Ley 27.350, distinguió tres categorías: autocultivador, terceros cultivadores y persona jurídica permitida.

Sin saber la categoría en la que los imputados se encuentran inscriptos, diré -a todo evento- que más allá del autocultivador (lo que no avalaría la teoría del fiscal), los terceros cultivadores (antes cultivadores solidarios) podrán cultivar para sí mismos y sólo para un adicional, el cual tendría que dar conformidad y renunciar a ser autocultivador.

Además, el tercero cultivador deberá acreditar que no cuenta con antecedentes penales con sentencia firme por infracción a la ley 23.737; presentar un informe cromatográfico por lote y un informe semestral en donde detalle cantidad de plantas en total y el tipo de genética utilizada, teniendo el permiso otorgado una vigencia de tres años.

Sin conocerse los recaudos exigidos, los controles administrativos efectuados, ni el trámite que ha cumplido la autoridad administrativa, así como tampoco si el citado Dr. [REDACTED] reúne los requisitos que establece el actual art 7mo -también modificado por Resolución 1780/25- esto es



CAMARA FEDERAL DE COMODORO RIVADAVIA

que se encuentre registrado en la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (REFEPS) y cuente con formación académica para la investigación y el tratamiento médico con cannabis medicinal; contar con firma digital registrada en el Ministerio de Salud y ante el REPROCANN presentar el "Consentimiento Informado Bilateral", no es posible concluir en la existencia de verosimilitud del derecho necesaria para sustentar la maniobra espúrea justificante de la revocación de la autorización conferida por vía de medida cautelar, la que, en este estado entiendo, importaría más que un aseguramiento del proceso, un adelantamiento indebido de pena.

Por todo lo expuesto, en uso de las facultades conferidas por los arts. 16, 155, 219, y concordantes del CPPF.

RESUELVO:

1.CONFIRMAR PARCIALMENTE la resolución dictada por la jueza de garantías de Río Grande en su punto II, sustituyendo la inhibición general de bienes por el embargo general de fondos, cuentas y valores, existentes en entidades bancarias y proveedores de servicios de pago/Fintech, con expresa prohibición de extracciones y/o transferencias a terceros, de titularidad exclusiva o conjunta de [REDACTED] autorizando al Ministerio Público Fiscal a librar los oficios correspondientes.

2.REVOCAR la inhibición general de bienes y la inmovilización y bloqueo de cuentas de [REDACTED]

3.REVOCAR el punto V del decisorio impugnado en cuanto autoriza la revocación mientras dure el proceso de los permisos y/o autorizaciones otorgadas por el REPROCANN a nombre de [REDACTED] y [REDACTED]

4.Protocolicese, publíquese y notifíquese.

Aldo E. Suárez
Juez de Revisión

